III. Otras disposiciones

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION

28552 SENTENCIA de 8 de noviembre de 1988, recaída en el conflicto de jurisdicción número 11/1988, planteado entre el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guipúzcoa y la Magistratura de Trabajo número 3 de San Sebastián.

Don Evaristo Cabrera Puerta, Secretario de Gobierno en funciones del Tribunal Supremo.

Certifico que en el conflicto de jurisdicción número 11/1988, se ha dictado el siguiente

CONFLICTO DE JURISDICCION NÚMERO 11/1988

En la villa de Madrid, a 8 de noviembre de 1988.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, integrado por los excelentísimos señores don Antonio Hernández Gil, Presidente, don Juan García-Ramos Iturralde, don Ramón Trillo Torres, don Gregorio Peces-Barba del Brio, don Miguel Vizcaino Márquez y don Landelino Lavilla Alsina, el suscrito entre el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guipúzcoa (reclamación número 39/1987) y la Magistratura de Trabajo número 3, de San Sebastián (Autos número 14/1988), conflicto planteado por don Gregorio Berrotarán Echeverría con motivo de las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, requerimientos números 10.641/1987 y 10.794/1987, por descubiertos en el pago de cuotas de la Seguridad Social.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por medio del requerimiento número 10.794/1987, trasladado a don Gregorio Berrotarán Echeverría por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante escrito de 3 de abril del mismo año, se puso de manifiesto la existencia de descubiertos en la cotización de régimen especial de autónomos a la Seguridad Social por parte del interesado.

Tal requerimiento suponía la estimación parcial del recurso de reposición presentado por el propio señor Berrotarán, contra otro anterior número 10.641/1987, y, por consiguiente, la corrección del mismo, quedando rectificada la fecha del alta del interesado, con la consiguiente diferencia que ello supone en el importe de la deuda.

Segundo.—A la vista de lo anterior, don Gregorio Berrotarán Echeverría se dirigió al Tribunal Económico-Administrativo de Guipúzcoa por escrito presentado en 24 de abril de 1987, interponiendo reclamación económico-administrativa, que se resolvió, previa la tramitación pertinente, por resolución de 18 de diciembre de 1987, en el que el referido Tribunal concluía declarándose incompetente para entrar en el fondo de la cuestión, debiendo a su juicio el órgano de gestión practicar una nueva notificación de la resolución, indicando los recursos que contra la misma pueda procedentemente interponer el interesado.

Se fundamenta dicha resolución en que los Tribunales Económico-Administrativos sólo son competentes para conocer de reclamaciones deducidas contra actos administrativos originados por la gestión recaudatoria, por lo que debe entenderse que sólo corresponden a dichos Tribunales conocimiento de las acciones sobre actos dictados en ejercicio de la actividad administrativa definida como de gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social por el artículo 1.º del Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, conducente a la realización de los créditos y derechos de la misma. Tales preceptos no se refieren a las liquidaciones.

Tercero.—En cumplimiento de tal resolución, por escrito de 27 de enero de 1987, la Tesorería General de la Seguridad Social notificó de nuevo el acto liquidatorio al administrado, ofreciéndole la posibilidad de interponer demanda ante la Magistratura de Trabajo, lo que en efecto hizo por el escrito presentado en 24 de febrero del mismo año.

Cuarto.—Tramitado el correspondiente procedimiento judicial, la Magistratura de Trabajo número 3 de San Sebastián, que resultó competente para conocer de la demanda, dictó Sentencia número 291, de 8 de junio de 1988, en la que se declara incompetente a la Jurisdicción Laboral, sin entrar en el fondo del asunto, para conocer del litigio, previniendo expresamente al demandante de que podría suscitar conflicto negativo de jurisdicción en el plazo y la forma previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1987.

Tal Sentencia fue notificada en 14 de junio de 1988 al demandante, presentando éste ante la misma Magistratura escrito el día 28 en el que solicita se tenga por instado Conflicto negativo de jurisdicción a fin de que el mismo pueda ser resuelto por el Tribunal de Conflictos, previa la tramitación oportuna.

Por escrito de 22 de junio de 1988, la Magistratura de Trabajo acordó, de acuerdo con la solicitud del interesado, requerir al Tribunal Económico-Administrativo para que en el plazo de diez días remitiera las actuaciones al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, remisión que asimismo hizo la propia Magistratura en lo que a los autos se refería.

Quinto.—Recibidas ya las actuaciones por este Tribunal, tanto del Tribunal Económico-Administrativo como de la Magistratura de Trabajo, mediante providencia de 26 de septiembre de 1988, se otorgó trámite de alegaciones, con vista de las actuaciones, al Ministerio Fiscal y a la Administración interviniente.

Sexto.—El Ministerio Fiscal presentó escrito en 5 de octubre de 1988, en el que estima que la competencia en el presente conflicto no corresponde a la Magistratura de Trabajo de Guipúzcoa sino a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues el asunto versa sobre impugnación de descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, y por consiguiente trata sobre actos de gestión recaudatoria de naturaleza administrativa por lo que dicha competencia de los Tribunales Contenciosos viene impuesta por los artículos 185 y 188 del Reglamento General de Recaudación de los recursos del sistema de Seguridad Social, de 7 de marzo de 1986, que desarrolla las previsiones del artículo 16.1 de la Ley 40/1980, de 5 de julio, lo que está en concordancia con el artículo 9.º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y con los artículos 1.º, y 1.º, c), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como asimismo la Sala Especial de Conflictos (sic) dijo en Sentencia de 23 de noviembre de 1987.

Séptimo.—El Abogado del Estado, por su parte, presenta escrito de 19 de octubre de 1988, en el que dice que los actos objeto del conflicto son típicos actos administrativos, y que la competencia para su resolución corresponde a los Tribunales Económico-Administrativos.

Ha sido Ponente en el presente conflicto el excelentísimo señor don Gregorio Peces-Barba del Brio.

Fundamentos jurídicos

1. El problema de la naturaleza jurídica de los actos de liquidación y recaudación de cuotas debidas a la Seguridad Social producidos por la Tesorería General han dado lugar a un conflicto negativo de competencia resuelto por este Tribunal, que no Sala de Conflictos, bajo número 7/1987, en Sentencia de 23 de noviembre de 1987, cuya tesis debe ahora reiterarse.

El esquema actual de recaudación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, tiene su origen en el Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, y Real Decreto-ley de 16 de noviembre del mismo año, sobre creación de la Tesorería General de la Seguridad Social y configuración del actual sistema orgánico. Asimismo, la Ley 40/1980, de julio, y el Real Decreto-ley 10/1981, de 19 de junio, que atribuyeron a dicha Tesorería la gestión recaudatoria, tanto en fase voluntaria como ejecutiva, si bien dejándose vigente el procedimiento de exacción de cuotas por actos de liquidación que la Ley General de la Seguridad Social atribuía a la Inspección de Trabajo. El Real Decreto 1674/1982, de 9 de julio, mantiene el principio de estatalización y descentralización administrativa, ordenando en su artículo 12 que sea la Tesorería General la que curse los requerimientos por descubiertos, requerimientos que en el presente caso son los que han dado lugar a los recursos presentados por el interesado y posteriormente, ante la declarada incompetencia del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guipúzcoa y de la Magistratura de Trabajo número 3 de San Sebastián, al presente conflicto.

Los artículos 185 y siguientes del Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, se refiere a la posibilidad de impugnación de los actos de gestión recaudatoria, bien ante la propia Tesorería, en reposición, o bien mediante reclamaciones económico-administrativas ante los Tribunales correspondientes.

Se está en presencia, por consiguiente, cuando se trata de actos de requerimiento de pago por cuotas por descubiertos a la Seguridad Social, ante típicos actos administrativos en sentido estricto, tanto si se toman tales requerimientos como actos iniciales del período recaudatorio como si se considera que se trata de actos meramente liquidatorios. Se trata efectivamente de resoluciones de una Administración Pública, que actúa investida de su posición de Entidad pública, revestida por consiguiente

de sus potestades que, cuando tal actuación se produce, asume. Y tal actuación es referible tanto a la facultad de liquidar como a la de recaudar, en el presente caso cuotas a la Seguridad Social.

A ello no se opone el artículo 9.º, de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, en cuanto atribuye al orden jurisdiccional social el conocimiento de las reclamaciones en materia de Seguridad Social, tanto se trate de conflictos individuales como colectivos, así como respecto a reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuye responsabilidad la legislación laboral. Pero no entran dentro de tal definición los actos estrictamente públicos y de Derecho Administrativo como son los referidos en materia de liquidación y exacción de cuotas.

II. Las relaciones que tienen su ámbito más o menos cercano en el Derecho Laboral, que por definición suponen en muchos casos la intervención de una Entidad pública, no siempre suponen que las relaciones jurídicas que surgen sean estrictamente de Derecho Laboral, tanto se trate de analizar la sustancia o naturaleza jurídica de dichas relaciones, como se trate de observar cuál es el órgano jurisdiccional competente. De hecho, el propio Tribunal Central de Trabajo mantiene recientemente en Sentencia de 17 de diciembre de 1986, que sólo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es competente en materia de reclamaciones por responsabilidad extracontractual amparadas en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Esto es lo que sucede en el presente caso en que, como se ha dicho, los recursos originados en actos de liquidación o recaudación de cuotas a la Seguridad Social, procedentes de la Entidad Tesorería General de la Seguridad Social, deberán dilucidarse atendiendo las normas específicas al respecto y ante los Tribunales Contencioso-Administrativos, previo agotamiento de las vías administrativa o económico-administrativa procedentes.

III. Por lo demás, el presente conflicto, negativo, ha sido correctamente planteado por don Gregorio Berrotarán Echeverría conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, de acuerdo con el ofrecimiento expreso que la notificación de la Sentencia de la Magistratura de Trabajo hacía.

Por lo demás, se ha dado vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, que ha presentado sus escritos informando en el mismo sentido que lo hace el fallo de la presente Sentencia.

Fallamos: Que el conflicto jurisdiccional negativo planteado por don Gregorio Berrotarán Echeverría como consecuencia de las resoluciones y Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Guipúzcoa de 18 de diciembre de 1987, y de la Magistratura de Trabajo número 3 de San Sebastián de 8 de junio de 1988, respectivamente, sobre requerimientos por descubierta en el pago de cuotas a la Seguridad Social producidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, debe resolverse en el sentido de que la competencia para conocer de la impugnación del interesado contra dichos requerimientos corresponde en vía económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo.

Así por esta nuestra Sentencia, que se comunicará a los órganos contendientes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Siguen firmas.—Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el excelentísimo señor don Gregorio Peces-Barba y del Brio, Ponente en estos autos, estando reunido el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en el día de la fecha, de que certifico.—Firmado y rubricado.

Y para que conste y remitir al «Boletín Oficial del Estado» cumpliendo lo acordado, expido y firmo la presente en Madrid a 21 de noviembre de 1988.

MINISTERIO DE JUSTICIA

28553 *ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso número 545/1986, interpuesto por doña María José David Cataluña.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 545/1986, de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, seguido a instancia de doña María José David Cataluña, contra acto presunto por silencio administrativo de reposición, contra la Resolución de 15 de enero de 1986, dictada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sobre traslado de destino, indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del mismo, y reconocimiento de los derechos económicos que corresponden por la situación de comisión de servicios, la expresada Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, ha dictado sentencia de 28 de octubre de 1988, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por doña María José David Cataluña, según lo pretendido en su demanda, por ser el acto impugnado conforme al ordenamiento jurídico; todo ello sin expresa mención de costas.»

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.»

En su virtud, este Ministerio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de noviembre de 1988.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

28554 *ORDEN de 22 de noviembre de 1988 por la que se da cumplimiento de la sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de 25 de julio, sobre recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Lafarga Martín.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Lafarga Martín, contra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de abril de 1986, sobre denegación de incremento de pensión de jubilación, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, ha dictado con fecha 25 de julio de 1988, la sentencia, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Lafarga Martín, contra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 16 de abril de 1986, que confirmaba acuerdo de la Junta del Patronato de Empleados de Notarías, denegatoria del incremento de pensión solicitada por el actor, por no corresponder a este orden jurisdiccional el conocimiento de la cuestión suscitada; sin expresa imposición de costas.»

Y en su vista,

Este Ministerio se ha servido disponer que se cumpla la mencionada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 22 de noviembre de 1988.

MUGICA HERZOG

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

28555 *RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis Gascón Priudo la rehabilitación en el título de Marqués de los Remedios.*

Don Luis Gascón Priudo ha solicitado la rehabilitación en el título de Marqués de los Remedios, cuya última titular fue doña Carmen Machín y Martínez Alcaide, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.º del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a partir de la publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 18 de noviembre de 1988.—El Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

MINISTERIO DE DEFENSA

28556 *ORDEN 413/38958/1988, de 31 de octubre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 de septiembre de 1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel Martín Pascual.*

Excemos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don Gabriel Martín Pascual, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resoluciones de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 1985, sobre